

D^a. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MUÑOZ, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO URBANÍSTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO", DE LEGANÉS (MADRID)

CERTIFICA:

Que el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico "Leganés Tecnológico", de Leganés (Madrid), en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2026, adoptó, entre otros, un acuerdo del siguiente tenor literal:

"OCTAVO.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO POR SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA Y URBANÍSTICA AL CONSORCIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR PP-2, CENTRO (EXPTE. CS/01/2024)

A) OBJETO

Es objeto de la presente propuesta la justificación de la legalidad y oportunidad de la emisión por el consejo de administración del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico de un acuerdo mediante el que se resuelva, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada interpuesto el día 14 de febrero de 2025 por don Pablo Bernad Conde en nombre y representación del licitador Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A. (referencia del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid 10/124894.9/25) frente al acuerdo de la mesa de contratación del organismo de 16 de enero de 2025 de excluirlo de la licitación convocada para la contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística al consorcio para la redacción del proyecto constructivo de ejecución de la subestación eléctrica STR Tecnológico en el ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/01/2024.

B) ESTATUTO DEL CONSORCIO

En términos generales, los consorcios urbanísticos son organismos de derecho público dotados de personalidad jurídica propia y diferenciada, creados por dos o más Administraciones territoriales (con o sin participación de personas privadas) para el desarrollo de la actividad urbanística y para la gestión y ejecución de obras y servicios públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En este marco, el consorcio urbanístico denominado «PP-A del P.A.U.-2 [*plan parcial de actuación del programa de actuación urbanística 2*], Autovía Toledo Norte», conocido



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **0999815217570171177971**

comúnmente como «Leganés Tecnológico» y, en ocasiones, como «Legatec», fue constituido el día 20 de diciembre de 1999 mediante el otorgamiento de escritura pública ante el Notario de Madrid don Gonzalo Gerona Peña al n.º 4.516 de su protocolo, con la misión de desarrollar, gestionar y ejecutar de forma cooperativa entre el municipio de Leganés y la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2.a) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el planeamiento urbanístico de los terrenos de uso industrial y terciario situados al noroeste del término municipal lindantes con las carreteras M-425, M-40 y autovía de Toledo, en el ámbito del suelo urbanizable no programado denominado PAU-2, «Autovía de Toledo Norte», del plan general municipal de ordenación urbana, a fin de implantar un parque industrial denominado «Leganés Tecnológico».

El consorcio ostenta la condición de entidad de derecho público integrante del sector público institucional dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, de las previstas en el artículo 2.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y goza de la consideración de Administración pública conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo. Está constituido por el Ayuntamiento de Leganés y la Administración de la Comunidad de Madrid, a la que está adscrito.

Conforme al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) establecido en el Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, el consorcio constituye una unidad institucional residente a título de productor no de mercado controlado por las Administraciones públicas y ajeno a los fondos de la Seguridad Social, que está encuadrada en el sector institucional Administraciones públicas (S.13), subsector Administración regional (S.1312). A efectos de contratación pública, el consorcio tiene la consideración de poder adjudicador en la categoría de Administración pública conforme a lo dispuesto en los apartados 1.d), 2.b) y 3.a) del artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Los estatutos del consorcio fueron aprobados al tiempo de su constitución y modificados por acuerdo del consejo de administración de 23 de mayo de 2000, elevado a público mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Gonzalo Gerona Peña el día 5 de julio de 2000 al n.º 2.485 de su protocolo con inclusión de los estatutos refundidos. Posteriormente, el día 6 de noviembre de 2019 el consejo de administración aprobó una nueva modificación de los estatutos para adaptarlos a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, modificación que, si bien ha sido aprobada por el pleno del ayuntamiento de Leganés el día 30 de septiembre de 2021, no está vigente en la actualidad al estar pendiente de aprobación por la Administración de la Comunidad de Madrid y de publicación en el diario oficial Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 76 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Los fines estatutarios que tiene atribuidos el consorcio, los cuales determinan el giro o tráfico peculiar del organismo al definir el aspecto nuclear de su misión institucional de desarrollo urbanístico, son (i) programar y ejecutar las actuaciones económicas y urbanísticas de promoción industrial del ámbito territorial de su competencia y (ii) gestionar unificadamente

el desarrollo urbanístico de dicho ámbito en colaboración con las Administraciones competentes, conforme se deduce de lo dispuesto en los epígrafes A) y B) del artículo 5 de los estatutos.

Para el cumplimiento de estos fines nucleares, el consorcio ha de desarrollar las funciones previstas en el mismo artículo 5 de los estatutos, entre las que se encuentran (i) elaborar los instrumentos de planeamiento de desarrollo, gestión y ejecución urbanística y sus modificaciones que sean necesarios y elaborar estudios y proyectos de promoción económica y urbanística, tal como se dispone en los epígrafes A), B) y D); (ii) programar y ejecutar las actividades urbanizadoras que deban desarrollarse y realizar las obras de infraestructura urbanística (epígrafes C) y E); (iii) realizar todas las actividades que conciernen a la preparación del suelo y la inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad (epígrafe E); (iv) cuidar de la conservación de la urbanización realizada y crear y gestionar los servicios complementarios que proceda (epígrafes J) y K); y (v) disponer del suelo enajenando el que corresponda conforme al destino previsto en el planeamiento (epígrafe F).

C) NECESIDADES A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

1. Desarrollo urbanístico del PAU-2, Autovía de Toledo Norte

La ordenación urbanística general del ámbito territorial de actuación del consorcio está constituida por el plan general de ordenación urbana de Leganés, revisado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 22 de julio de 1999 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 40, de 17 de febrero de 2000, suplemento). El instrumento específico de desarrollo urbanístico del área es el programa de actuación urbanística PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, aprobado mediante acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid de 28 de mayo de 2002 (B.O.C.M. número 174, de 24 de julio de 2002) y modificado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 2013, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Sectorización para modificación del Programa de Actuación Urbanística PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés (diario oficial número 157, de 4 de julio de 2013). En el diseño del desarrollo urbanístico del área se diferencian tres ámbitos territoriales de actuación: Sector 1 “Oeste”, Sector 2 “Centro” y Sector 3 “Este”.

La ordenación urbanística pormenorizada del ámbito del sector 1, “Oeste”, está constituida por el plan parcial del Sector 1/Oeste del PAU 2 “Autovía de Toledo Norte”, que fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés el día 17 de septiembre de 2002 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 274, de 18 de noviembre de 2002) y modificado mediante sendos acuerdos plenarios de 27 de abril de 2007 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 206, de 30 de agosto de 2007) y 13 de mayo de 2008 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 269, de 11 de noviembre de 2008).

La ordenación urbanística pormenorizada del ámbito del sector 2, “Centro”, al que se refiere la presente contratación, está constituida por el plan parcial del Sector 2, Centro, del plan de sectorización “Autovía de Toledo Norte”, que fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés con fecha 29 de enero de 2015 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 77, de 1 de abril de 2015). El planeamiento urbanístico prevé como sistema de

ejecución del ámbito la expropiación, por lo que el día 30 de enero de 2020 la Comisión de Urbanismo de Madrid aprobó definitivamente el proyecto de delimitación y expropiación del ámbito del plan parcial (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 46, de 24 de febrero de 2020). El proyecto de parcelación del sector fue aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 13 de octubre de 2022; dentro del mismo se localiza la parcela STR, con 1.600 m² de superficie y 1.120 m² de edificabilidad, destinada a la construcción de una subestación eléctrica que habrá de ser llamada “STR Tecnológico”.

2. Electrificación del Sector 2, Centro

El proyecto de urbanización original del sector 2, Centro, fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local con fecha 10 de febrero de 2015; este proyecto no contemplaba la ejecución de la subestación eléctrica ni tampoco sus conexiones exteriores, puesto que en la conformidad técnica emitida con fecha 21 de marzo de 2017 por la empresa distribuidora de energía eléctrica se preveía que estas infraestructuras fueran diseñadas y ejecutadas por la propia distribuidora Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. (actualmente, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.) con cargo al consorcio, estimándose un coste de 8.333.830€, a razón de 3.316.071,15€ para la construcción de dos conexiones exteriores a 15KV y 4.341.855€ para la subestación y actuaciones de refuerzo en las instalaciones preexistentes.

Sin embargo, en el año 2022 el consorcio promovió la modificación del proyecto de urbanización para incluir en su seno una conexión viaria con el ámbito territorial del programa de actuación urbanística “Leganés Norte” del propio plan general de ordenación urbana, que anteriormente se había diseñado como proyecto independiente, e introducir algunas adaptaciones de las acometidas de servicios a la nueva parcelación aprobada el 13 de octubre de 2022, de las redes de alumbrado a la tecnología led y de la gestión de espacios naturales a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Este nuevo proyecto de urbanización fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local con fecha 17 de agosto de 2022 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 214, de 8 de septiembre de 2022), quedando sin efecto la anterior aprobación inicial de 29 de enero de 2015 e iniciándose nuevos trámites de información pública e informes sectoriales. En este marco, el día 7 de julio de 2023 la empresa distribuidora de energía eléctrica emitió un informe (fechado a 30 de junio de 2023) formulando unas condiciones de conformidad técnica muy diferentes de las requeridas en el año 2017, por cuanto que demanda que a las de dos conexiones exteriores ya previstas con sendas subestaciones existentes en Carabanchel (STR Aguacate) y Villaverde (STR Parque de Ingenieros) a una tensión de 15kV, se unan dos nuevas conexiones a otras dos subestaciones más alejadas, sitas en La Fortuna (STR La Fortuna) y Aluche (STR Polígono C), y mediante líneas con una diferencia de potencial mucho más elevada (45kV).

La nueva conformidad técnica establece también que la ejecución de todas las infraestructuras de extensión de la red, conexiones exteriores y nueva subestación eléctrica se lleve a cabo directamente por el consorcio y no por la empresa suministradora con cargo al consorcio, de tal manera que i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ha previsto limitar sus actuaciones a la ejecución de los trabajos de refuerzo y adecuación de las instalaciones de la red existente. Dada la complejidad técnica de las actuaciones de cuenta del consorcio, que suponen ejecutar obras tanto

en su ámbito natural de actuación del municipio de Leganés, como en el municipio de Madrid, ajeno a dicho ámbito, así como la posible necesidad de tramitación administrativa de instrumentos adicionales de planeamiento y estudios sectoriales de medio ambiente, y dada también la falta de experiencia previa por parte de los servicios administrativos del consorcio en la ejecución de este tipo de trabajos puesto que todos los desarrollos urbanísticos anteriores se han gestionado conforme al modelo de ejecución por la empresa suministradora y pago por el promotor urbanístico, con fecha 27 de julio de 2023 se solicitó a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la suscripción de un convenio que incluyera, conforme al artículo 9 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica, la ejecución de las obras por la propia empresa suministradora con cargo al promotor. En contestación, con fecha 12 de febrero de 2024 la empresa distribuidora denegó esa posibilidad argumentando que el consorcio debía haber realizado su solicitud desde el mismo inicio del procedimiento conforme al artículo 12.7 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, de tal manera que, para considerar la posibilidad de suscripción de un convenio de ejecución de las infraestructuras de extensión por el gestor de la red, se debería reiniciar el expediente, con el riesgo de perder la viabilidad ya obtenida o de que se impusieran unas condiciones de conformidad técnica más onerosas todavía.

De este modo, dejando aparte la red interior del ámbito, que habrá de ejecutarse conforme a las previsiones del proyecto de urbanización, el presupuesto de las obras exteriores de la red de distribución de energía eléctrica, compuestas por el refuerzo de las instalaciones existentes, que la empresa suministradora ha de ejecutar con cargo al consorcio, más las obras de extensión de la red a ejecutar por este, asciende a 13.512.921,18€, lo que supone un incremento del 60% respecto de las condiciones económicas de la conformidad técnica de 21 de marzo de 2017, según el siguiente desglose y estimación:

- Actuaciones de refuerzo de instalaciones, 821.742,78€; según las condiciones a que se sujeta la nueva conformidad técnica, el consorcio debe abonar a la empresa suministradora el 10% (82.174,28€) en el plazo de 1 año y el resto conforme a un convenio específico a suscribir entre las partes.
- Actuaciones de extensión de red, 12.691.178,30€; este importe se ha estimado a partir de las previsiones presupuestarias de la conformidad técnica de 2017 actualizadas a la variación del índice de precios de consumo, más los costes de las dos nuevas conexiones, estimados a partir de los presupuestos de obras similares.

A tenor de estos antecedentes, el cumplimiento de las condiciones impuestas por la empresa distribuidora de energía eléctrica en su última conformidad técnica de 7 de julio de 2023 requiere que el consorcio lleve a cabo directamente todas las actuaciones de extensión de la red, esto es, la construcción de la subestación eléctrica y las cuatro nuevas conexiones exteriores; para ello es necesario, como primer paso previo a la ejecución de las obras, proceder a la redacción y tramitación administrativa de los correspondientes proyectos urbanísticos y constructivos.

D) EMISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO**1. Expediente de contratación**

Para la satisfacción de las necesidades administrativas descritas, el día 23 de mayo de 2024 el consejo de administración, en su condición de órgano de contratación del consorcio, acordó aprobar el inicio del procedimiento de contratación pública administrativa típica de servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística para la redacción del proyecto constructivo de ejecución de la subestación eléctrica STR Tecnológico en el ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/01/2024. Concluida la instrucción del procedimiento de contratación, el día 13 de septiembre de 2024 dos vocales del consejo de administración apoderados específicamente para ello en el acuerdo de incoación del procedimiento aprobaron el pliego de cláusulas administrativas particulares, previo informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, y el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como el expediente de contratación y el gasto destinado a financiar las obligaciones económicas que habrían de resultar para el consorcio por razón de la contratación, y dispusieron la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato.

2. Licitación del contrato

Mediante anuncio publicado el día 16 de septiembre de 2024 en el perfil de contratante del consorcio alojado en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, se hizo pública la licitación del contrato por procedimiento abierto simplificado ordinario, abriéndose el plazo de presentación de ofertas hasta el día 11 de octubre de 2024.

Presentaron oferta a la licitación tres (3) operadores económicos para un total de tres (3) ofertas, en concreto:

Razón social	Fecha	Hora	Registro
Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U.	11/10/2024	12:31:00	10/876270.9/24
Inco Estudio Técnico, S.L.	11/10/2024	20:20:00	10/877779.9/24
Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A.	11/10/2024	12:05:00	10/876048.9/24

3. Valoración de las proposiciones

Para la valoración de las proposiciones se constituyó la mesa de contratación permanente del consorcio conforme a la composición determinada mediante acuerdo del consejo de administración de 6 de noviembre de 2019 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 295, de 12 de diciembre de 2019), cuyos miembros fueron designados específicamente para la adjudicación de este contrato mediante resolución del director-gerente de 24 de octubre de 2024, emitida por delegación del órgano de contratación, que fue publicada en el perfil de contratante al día siguiente.

I.) El día 31 de octubre de 2024 se celebró la primera sesión de la mesa de contratación, en la que se procedió al análisis y calificación de la documentación de aptitud y garantía presentada

por los licitadores (sobre n.º 1), comprobando la mesa la idoneidad de la documentación incorporada, por lo que procedió a la admisión de los licitadores a la licitación.

A continuación, se procedió en acto público telemático a la apertura del sobre n.º 2, que contiene la proposición técnica de cada licitador relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor. Habiéndose publicado anuncio en el perfil de contratante invitando a asistir a aquellas personas interesadas, con antelación mínima de 48 horas, según anuncio de licitación, se recibió solicitud de asistencia por parte del licitador Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U., personándose en el acto público don Álvaro Ballesteros Manzanares (D.N.I. ***1559**). Acto seguido, se clausuró el acto público y la mesa acordó la remisión de la documentación al comité de evaluación que había sido designado a tal efecto por resolución de 29 de octubre de 2024 del director gerente por delegación del consejo de administración.

El acta de esta sesión de la mesa fue publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación el mismo día de la celebración de la sesión.

II.) El día 26 de noviembre de 2024 se celebró la segunda sesión de la mesa de contratación, en la que se procedió a tomar razón del informe emitido el día 13 de noviembre de 2024 por el comité técnico designado para la evaluación de las ofertas técnicas respecto de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor. No obstante, la mesa, al proceder al análisis del informe para tomar razón de la puntuación, consideró insuficiente la motivación proporcionada para acreditar las puntuaciones otorgadas en la valoración de las ofertas, por lo que, de acuerdo con el artículo 150.1 párrafo 2º y el 157.5 párrafo 1º de la Ley de Contratos del Sector Público, acordó requerir al comité motivación complementaria de las valoraciones emitidas.

El acta de esta sesión de la mesa fue publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación el mismo día de la celebración de la sesión.

III.) El día 12 de diciembre de 2024 se celebró la tercera sesión de la mesa de contratación, en la que se procedió a tomar razón del informe emitido el día 2 de diciembre de 2024 por el comité de evaluación de las ofertas respecto de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, dando como resultado la siguiente puntuación:

Razón social	Conocimiento	Planificación	Organización	Total juicio valor
Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U.	12	6,75	6,75	25,5
Inco Estudio Técnico, S.L.	14,25	3	6	23,25
Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A.	12	6	7,13	25,13

A continuación, se procedió en acto público telemático a la apertura del sobre nº 3, que contiene la proposición económica de cada licitador y la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.

Habiéndose publicado anuncio en el perfil de contratante invitando a asistir a aquellas personas interesadas, con antelación mínima de 48 horas, según anuncio de licitación, se recibió solicitud de asistencia por parte del licitador Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U., personándose en el acto público don Álvaro Ballesteros Manzanares (D.N.I. ****5598*). Acto seguido, la mesa procedió al análisis pertinente de la proposición técnica de cada licitador, con el resultado siguiente:

Razón social	Experiencia autor	Experiencia redes	Experiencia medio-ambiente	BIM 300	Total criterios automáticos
Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U.	10	6	4	5	25
Inco Estudio Técnico, S.L.	2	6	4	5	17
Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A.	10	6	4	5	25

Tras ello, se procedió a la lectura y análisis de las ofertas económicas, con el siguiente resultado:

Razón social	Propuesta económica I.V.A. incluido (€)
Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U.	66.695,20
Inco Estudio Técnico, S.L.	71.579,37
Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A.	54.341,10

Acto seguido, se clausuró el acto público y la mesa procedió al análisis de las proposiciones económicas, comprobando que la proposición del licitador Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A. se hallaba incurso en presunción de anormalidad (baja del licitador del 30,91%, siendo el límite de la baja en presunción de anormalidad del 28,37%), por lo que la mesa acordó requerir al licitador antedicho justificación de la oferta según la tramitación prevista en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El acta de esta sesión de la mesa fue publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación el mismo día de la celebración de la sesión.

En ejecución de lo acordado por la mesa de contratación, el propio día 12 de diciembre de 2024 la secretaria de la mesa requirió de Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A., como licitador cuya proposición se hallaba incurso en presunción de anormalidad, la aportación de la documentación justificativa de las circunstancias que le permitieran ejecutar el contrato en las condiciones ofertadas, requerimiento que le fue notificado al día siguiente.

4. Exclusión del licitador

El día 16 de enero de 2025 se celebró la cuarta sesión de la mesa de contratación, en la que se comprobó que, transcurrido el plazo de diez días hábiles concedido al licitador Servicios

Auxiliares de Telecomunicación, S.A. para justificar la viabilidad de su oferta en presunción de anormalidad, no se había recibido documentación acreditativa alguna, por lo que, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público, la mesa acordó calificar la oferta como anormalmente baja y propuso su exclusión de la licitación.

Acto seguido, la mesa procedió a valorar las restantes ofertas presentadas, de acuerdo a lo actuado en sesiones anteriores, con el siguiente resultado:

Razón social	Oferta económica	Puntuación total
Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U.	45,00	95,50
Inco Estudio Técnico, S.L.	41,23	81,48

Una vez valoradas las ofertas, la mesa procedió a la clasificación de las mismas en orden decreciente de puntuación, con el siguiente resultado:

Razón social	Puntuación total	Orden
Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U.	95,50	1
Inco Estudio Técnico, S.L.	81,48	2

Según la clasificación, a la vista de lo actuado, la mesa acordó por unanimidad que se requiriera al licitador que había presentado mejor oferta, Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U., la constitución de la garantía definitiva en los términos establecidos en la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como el resto de documentación establecida la cláusula 15 del pliego que fuera pertinente.

El acta de esta sesión de la mesa fue publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación el mismo día de la celebración de la sesión.

El propio día 16 de enero de 2025, en cumplimiento del acuerdo de la mesa de contratación, el director-gerente del consorcio requirió de Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U., en su condición de licitador mejor postor tras la exclusión de la oferta anormalmente baja, la aportación de la documentación acreditativa de la capacidad para celebrar el contrato. En contestación, el licitador presentó el día 24 de enero de 2025 tres bloques de documentación con sendos números del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid 10/058683.9/25, 10/058707.9/25 y 10/058976.9/25; entre esta documentación se encontraba la acreditación de la constitución de la garantía definitiva del contrato, instrumentada mediante depósito el día 21 de enero de 2025 en la Tesorería General de la Comunidad de Madrid, en su condición de Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid, de un seguro de caución por importe de 2.756€ suscrito con la entidad aseguradora Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (N.I.F. A28013050), con número de resguardo 202555000293H.

E) RECURSO FRENTE A LA EXCLUSIÓN DE LA LICITACIÓN

1. Interposición e instrucción del recurso

El día 14 de febrero de 2025 don Pablo Bernad Conde, actuando en nombre y

representación del licitador Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A., interpuso recurso (referencia del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid 10/124894.9/25) frente al acuerdo de la mesa de contratación de 16 de enero de 2025 de excluirlo de la licitación, solicitando la retroacción de actuaciones al momento de cumplimentar el requerimiento de justificación de la viabilidad de su oferta, así como el reconocimiento de su situación jurídica individualizada como mejor postor. A tal efecto, el recurrente adujo que había presentado en tiempo y forma la documentación que le había sido requerida, adjuntando a modo de prueba un justificante acreditativo de la presentación el día 19 de diciembre de 2024 a las 14:05 horas en el registro electrónico general de la Administración General del Estado de determinada documentación dirigida a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid (referencia registral REGAGE24e00094790640) a título de contestación al requerimiento de justificación de la viabilidad de la oferta incurso en presunción de anormalidad en el procedimiento de contratación CS/01/2024; sin embargo, esta documentación, como se ha indicado, no llegó a poder de la mesa de contratación.

El día 17 de febrero de 2025, el director-gerente del consorcio resolvió hacer pública la interposición del recurso en el perfil de contratante del órgano de contratación, lo que se llevó a cabo al día siguiente. Igualmente resolvió conferir traslado del recurso a los restantes licitadores, a efectos de que pudiesen formular las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimaran procedentes, lo que fue notificado a Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U. el día 18 de febrero de 2025 y a Inco Estudio Técnico, S.L. al día siguiente. El mismo día 18, el director-gerente resolvió también solicitar informe de la mesa de contratación en su condición de órgano emisor del acto impugnado. Para la emisión de dicho informe, el propio día 18 de febrero de 2025 el presidente de la mesa de contratación solicitó a su vez de la unidad administrativa encargada del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid en la consejería que facilitase información específica sobre la eventual recepción y ulterior tramitación realizada respecto de la documentación que el recurrente había aducido haber presentado en el registro electrónico general de la Administración General del Estado.

El día 26 de febrero de 2025 el licitador Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U. presentó alegaciones con referencia del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid 10/162797.9/25, solicitando la desestimación del recurso. No consta la presentación de alegaciones en el trámite de audiencia por parte del licitador Inco Estudio Técnico, S.L.

El día 13 de marzo de 2025 el jefe del Área de Régimen Interior y Apoyo Técnico de la Secretaría General Técnica, unidad administrativa encargada del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, emitió informe poniendo de relieve que los documentos en disputa no se habían presentado de forma telemática directamente ante la Comunidad de Madrid, sino a través del registro electrónico general de la Administración General del Estado, y no habían llegado a entrar en el registro electrónico general de la Comunidad de Madrid en la consejería porque el Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico no está incluido en la estructura de este registro y, aunque los servicios de gestión intentaron contactar con el interesado en varias ocasiones para que especificase la unidad de la consejería a la que habrían de enviarse los documentos, no obtuvieron respuesta, por lo que la documentación fue finalmente rechazada para su devolución al remitente.

2. Informe de la mesa de contratación

El día 20 de marzo de 2025 se celebró la quinta sesión de la mesa de contratación, cuyo orden del día era la emisión de informe sobre el recurso interpuesto y el posterior análisis de la documentación acreditativa para celebrar el contrato aportada por el siguiente licitador mejor postor (tras la exclusión de la oferta anormalmente baja que la mesa había acordado en la sesión del día 16 de enero de 2025) y, en caso de que esta documentación fuese correcta, proponer la adjudicación del contrato.

Para la emisión del informe sobre el recurso, la mesa tomó razón del propio recurso interpuesto por el licitador excluido, de las alegaciones presentadas por el licitador mejor postor tras la exclusión de la oferta anormalmente baja y del informe emitido por la unidad administrativa encargada del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid en la consejería. A la vista de lo actuado, la mesa acordó elevar al órgano de contratación el siguiente informe:

"Se considera que la actuación de la mesa ha sido la adecuada, a la vista de la documentación que ha tenido a la vista en cada momento del procedimiento (específicamente el 16 de enero de 2025), no pudiendo ser responsable de la elección del licitador cuya exclusión se propuso del uso de un registro electrónico diferente del indicado en el requerimiento para justificar la oferta inicialmente incurso en presunción de anormalidad.

Los integrantes de la mesa discrepan en cuanto al sentido que ha de darse a la resolución del recurso interpuesto, que, en todo caso, es competencia del órgano de contratación. Por un lado, el presidente considera que el licitador contraviene el punto octavo del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el punto 2 del artículo 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no utilizando el registro que se le indica en pliego y requerimiento. Por otro lado, la letrada, el funcionario en funciones de intervención y el vocal de la administración local, indican que, dado que en el PCAP no se establece como obligatorio para el licitador la presentación de la documentación en el registro de la Comunidad de Madrid, sino que sólo se le habilita para la presentación en el mismo, y a la vista de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, entienden que la presentación en el registro de la Admon. del Estado (Reg AGE) es válida. En el requerimiento realizado al interesado, si se hubiese tratado de un trámite de un procedimiento específico (artículo 16.8 de la Ley 39/2015), el artículo 37.4 del RD 203/2021 de 30 de marzo, añade que el órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento tiene la obligación de comunicar esta circunstancia al interesado, e informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, lo que no está claro que se indicara en el requerimiento."

Respecto del segundo asunto del orden del día, referido al análisis de la documentación acreditativa para celebrar el contrato aportada por el licitador mejor postor tras la exclusión de la oferta anormalmente baja y la eventual propuesta de adjudicación del contrato, la mesa acordó no proseguir con la instrucción del procedimiento, con el voto en contra del presidente, quien hizo

constar la consideración de que *"la continuación del mismo reduce el número de convocatorias del órgano de contratación y de la mesa sin generar indefensión ninguna a ninguno de los licitadores (el órgano de contratación, en su próxima sesión, podría desestimar el recurso de SATEL y adjudicar el contrato, o bien estimarlo y ordenar la retroacción de las acciones al momento que considere)"*.

El acta de esta sesión de la mesa fue publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación el día 28 de marzo de 2025.

3. Emisión y rechazo de la propuesta de no adjudicar el contrato

Tras constatar que obraban en el expediente argumentos materiales contrapuestos en favor y en contra de la estimación del recurso, el día 12 de junio de 2025 el director gerente del consorcio, considerando la conveniencia de tener en cuenta también las consecuencias que pudiera tener la decisión administrativa sobre la tempestiva satisfacción de las necesidades administrativas que justificaron la contratación, así como la oportunidad de una solución alternativa al servicio de los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, emitió una propuesta de resolución en virtud de la cual el órgano de contratación acordaría no adjudicar el contrato, dispondría la apertura de un nuevo procedimiento de adjudicación e incoaría de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial para compensar a los licitadores por los gastos de la licitación, declarando tras ello la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento de resolución del recurso.

Sometida esta propuesta a la consideración del consejo de administración en su sesión del día 17 de junio de 2025, el órgano superior del consorcio la rechazó por considerar que se había producido un error en la tramitación de las contrataciones y que, por tanto, la decisión procedente no sería la de no adjudicar el contrato, sino, bien la de desistir del procedimiento de adjudicación, o bien la de resolver el recurso con la retroacción de actuaciones que resultare procedente, ordenando en consecuencia que se emitiera una nueva propuesta revisando las bases jurídicas de la decisión a adoptar.

4. Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por el consejo de administración, el día 1 de octubre de 2025 el director gerente del consorcio, considerando la conveniencia de valorar las diferentes alternativas planteadas para la resolución del caso (estimar o desestimar el recurso, desistir del procedimiento de adjudicación, volver a proponer no adjudicar el contrato u otras posibilidades no contempladas), solicitó de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid la emisión de informe facultativo específico sobre la mejor decisión en términos de gobernanza que procediera emitir ante la interposición del recurso.

El día 26 de noviembre de 2025 la Abogacía General de la Comunidad de Madrid emitió el informe facultativo A.J.C. 154/2025, en el que se formularon las siguientes conclusiones:

"PRIMERA: Conforme a lo expresado en la consideración jurídica primera, no procedería la no adjudicación del contrato, al no quedar debidamente justificadas en el expediente las razones de interés público.

Tampoco parece posible el desistimiento del procedimiento de contratación, al ser

subsana la infracción, admitiendo la documentación presentada por el licitador.

No siendo admisible, conforme a lo expuesto, la no adjudicación del contrato ni el desistimiento del procedimiento, tampoco procede, consecuentemente, iniciar una nueva licitación, ni un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

SEGUNDA: De acuerdo con los preceptos mencionados en la consideración jurídica segunda, debiera estimarse parcialmente el recurso, considerar válida la presentación de la documentación por medio del Registro Electrónico General en fecha 19 de diciembre de 2024 y retrotraer las actuaciones, a los efectos de proceder, por la mesa de contratación, al examen de la documentación presentada."

F) MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

1. Admisibilidad del recurso

Como primer requisito formal para la admisión a trámite del recurso, es de señalar, en cuanto a la legitimación del recurrente Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A., que no es difícil inferir su interés legítimo individual suficiente a efectos de lo dispuesto en el epígrafe a) del artículo 4.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la medida en que la estimación del recurso podría conllevar que se admitiese la oferta presentada y, en tal caso, que se le adjudicase el contrato dada su condición inicial de licitador mejor postor.

En cuanto a las condiciones que ha de tener el acto impugnado para poder ser recurrido, es de señalar en primer lugar, en términos generales, que el objeto de los recursos administrativos es el análisis de las pretensiones de declaración de nulidad o anulación, según los casos, de los actos administrativos definitivos (resoluciones) o de trámite (cuando decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos), formuladas por los interesados y fundadas en los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículo 112.1, párrafo primero, de la misma), distinguiendo dos clases de recursos ordinarios en función de que el acto impugnado agote o no la vía administrativa (artículos 121.1, alzada, y 123.1, reposición). En el presente caso, aun cuando el recurrente haya calificado expresamente su recurso como de reposición, el hecho de que lo dirija contra el acuerdo de la mesa de contratación de excluirlo de la licitación por no presentar documentación justificativa de la viabilidad de su oferta incurso en presunción de anormalidad, determina la necesidad de calificar el recurso como de alzada y darle la correspondiente tramitación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 115.2 de la ley ritaria.

De este modo, procede admitir a trámite el recurso de alzada por cuanto que se dirige contra un acto administrativo que, sin poner fin a la vía administrativa, se incardina en el presente caso en la categoría de los actos de trámite cualificados en la medida en que impide al recurrente continuar el procedimiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el inciso inicial de su artículo 121.1. Es por este motivo que el director-gerente del consorcio solicitó el día 17 de febrero de 2025 la emisión del preceptivo informe de la mesa de contratación en su condición de órgano emisor del acto impugnado, conforme al artículo 121.2, párrafo segundo,

de la ley.

2. Análisis de la decisión de no adjudicar el contrato

El día 12 de junio de 2025 el director gerente del consorcio formuló una propuesta de resolución en la que, tras analizar los argumentos materiales en favor y en contra de la estimación del recurso (alegaciones del recurrente y del licitador que acudió al trámite de audiencia, informe del órgano emisor del acto impugnado) y las necesidades administrativas a satisfacer con la contratación, instaba al consejo de administración a emitir un acto en virtud de la cual el órgano de contratación acordaría no adjudicar el contrato, dispondría la apertura de un nuevo procedimiento de adjudicación e incoaría de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial para compensar a los licitadores por los gastos de la licitación, declarando tras ello la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento de resolución del recurso.

Esta propuesta fue analizada, junto con la restante documentación del procedimiento, en el informe de la Abogacía General A.J.C. 154/2025, en el que, tras dar cuenta del alcance jurídico del concepto de "razones de interés público debidamente justificadas en el expediente" que se establece en el artículo 152.3 de la Ley de Contratos del Sector Público como requisito de la decisión administrativa de no adjudicar o celebrar un contrato, concluye que, si bien es doctrina esencial interpretativa del precepto el que la renuncia a la celebración del contrato acordada por el órgano de contratación con anterioridad a la adjudicación del contrato, debe ampararse en razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, sin que resulte necesario que las razones invocadas tengan carácter sobrevenido o exógeno al propio procedimiento de licitación, en la medida en que lo determinante es que dichas razones de interés público persistan antes de la culminación del procedimiento de adjudicación (STS 714/2022, de 9 de junio de 2022, Rec. 5347/2020), en el presente caso, *"No parece posible que la presentación de un recurso, el deber de resolución del mismo y el consecuente retraso en la tramitación del procedimiento y en la ejecución del contrato, pueda admitirse como razón de interés público que justifique la decisión de no adjudicar un contrato. Sin entrar en otras razones (como el deber inexcusable de la Administración de resolver los recursos que se interpongan), la no adjudicación sería un acto susceptible de recurso y estaríamos ante la misma situación. / Así, se considera que no se cumple el requisito exigido en el meritado artículo, al no encontrarse las razones de interés público debidamente justificadas en el expediente"* (página 17).

Constatada, por tanto, con buenos argumentos la inviabilidad jurídica de esta solución, procede rechazar la posibilidad de resolver el caso mediante una decisión de no adjudicar el contrato con promoción de nueva licitación.

3. Análisis del desistimiento del procedimiento de adjudicación

El día 17 de junio de 2025 el consejo de administración del consorcio, tras rechazar la propuesta de 12 de junio del director gerente, ordenó revisar las bases jurídicas de la decisión a adoptar, sugiriendo que la decisión procedente podría ser, bien desistir del procedimiento de adjudicación, bien resolver el recurso con retroacción de actuaciones; de acuerdo con lo ordenado, procede analizar en primer lugar la legalidad y oportunidad de una eventual decisión del órgano de

contratación de desistimiento del procedimiento de adjudicación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación podrá acordar desistir del procedimiento de adjudicación de un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria pero no haya sido todavía formalizado, cuando concurra una causa, debidamente justificada en el expediente, fundada en infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

En principio, en el presente caso concurre una infracción formal en la instrucción del procedimiento de adjudicación, pero no en el acto impugnado de 16 de enero de 2025 ni en ninguna otra actuación realizada por la mesa de contratación, sino en el requerimiento previo del director-gerente del consorcio para que el licitador justificara la viabilidad de su oferta incurso en presunción de anormalidad, en el que se indicaba el régimen en que “la documentación deberá presentarse” pero no se incluyó la advertencia prevista en el artículo 37.4 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado mediante Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, de que en aquellos casos en que no se tengan por presentados en el registro unos documentos o información debido a que su régimen especial establezca otra forma de presentación, el órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento tiene el deber de comunicar esta circunstancia al interesado e informarle de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable; es decir, el requerimiento informaba de los requisitos de presentación exigidos, pero no advertía de las consecuencias de la presentación incorrecta.

En el informe de la Abogacía General A.J.C. 154/2025 que obra en el expediente, se analiza también esta cuestión, con un enfoque distinto pero complementario. En este informe, tras dar cuenta del alcance jurídico del desistimiento como acto que, a diferencia de la renuncia, no es un acto discrecional determinado por el cambio de voluntad de la Administración, sino un acto reglado fundado en causas de legalidad y no de oportunidad, se analiza el alcance jurídico del concepto de “infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación” que se establece en el artículo 152.4 de la Ley de Contratos del Sector Público como requisito de la decisión administrativa de desistir del procedimiento de adjudicación, concluyendo que, si bien en relación con la exigencia de que la infracción no sea subsanable, la doctrina no es unánime respecto de si la infracción debe venir necesariamente referida a un vicio de nulidad de pleno derecho o bastaría con la existencia de un vicio de anulabilidad que, por su naturaleza, no admitiese subsanación durante la instrucción del procedimiento de adjudicación, en el presente caso, *“de los antecedentes de hecho primero y noveno, resulta “que en el PCAP no se establece como obligatorio para el licitador la presentación de la documentación en el registro de la Comunidad de Madrid, sino que sólo se le habilita para la presentación en el mismo”. / En todo caso, el defecto en el requerimiento realizado sería subsanable, siendo indiferente a tal efecto que el procedimiento de adjudicación seguido en el caso que nos ocupa sea el procedimiento abierto simplificado, por lo que no parece posible la opción planteada de desistir del mismo”* (página 19).

En resumen, se estima que no concurren las circunstancias previstas en el artículo 152.4 de la Ley de Contratos del Sector Público como determinantes del supuesto de hecho de una decisión de desistimiento del procedimiento de adjudicación porque la infracción cometida no lo es ni de

normas de preparación del contrato, ni de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, toda vez que no hay irregularidad alguna ni en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación (el cual fue informado favorablemente por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid), ni en la instrucción de los procedimientos de contratación o de adjudicación, ni en la designación o actuación de los órganos competentes. Desde otra perspectiva, en el informe jurídico sobre la resolución del recurso se razona que no procede desistir del procedimiento porque no concurre el requisito de que la infracción sea insubsanable; para llegar a esta conclusión es necesario determinar el alcance de las consecuencias jurídicas de la infracción cometida en la emisión del requerimiento, cuestión sobre la que se trata a continuación.

4. Resolución del recurso

Descartadas, por tanto, las eventuales decisiones del órgano de contratación de renunciar a la adjudicación o desistir del procedimiento de adjudicación, procede pronunciarse sobre el fondo del recurso. Por decirlo en términos del informe de la asesoría jurídica, *"No siendo admisible, conforme a lo expuesto, la no adjudicación del contrato ni el desistimiento del procedimiento, tampoco procede, consecuentemente, iniciar una nueva licitación, ni un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Debiendo proceder por tanto la Administración a la resolución del recurso interpuesto"* (página 20).

Conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (entendida esta como el empleo de una potestad administrativa para un fin distinto del previsto en la ley), si bien el defecto de forma sólo determina la anulabilidad en los supuestos en que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, constituyendo los defectos de forma en los restantes casos meras irregularidades no invalidantes que no afectan a la ejecutividad del acto administrativo (un ejemplo de las cuales se contiene en el apartado 3 del propio artículo 48 de la ley, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando la naturaleza del término o plazo no imponga la anulabilidad del acto).

Si se analiza la infracción cometida en el requerimiento de 12 de diciembre de 2024 como defecto de forma por no haber indicado las consecuencias que tendría la presentación de la documentación que no respetase las indicaciones facilitadas, cabe considerar que sus efectos sobre el acto impugnado de 16 de enero de 2025, aun no siendo inmediatos (puesto que interfieren sobre la causalidad del acto tanto la actuación del propio licitador presentando la documentación sin seguir las indicaciones del requerimiento, cuanto la actuación posterior de los servicios administrativos de registro devolviendo a origen la documentación tras su intento de averiguar la unidad administrativa destinataria), sí son innegables. Ahora bien, entendiendo que los requisitos indispensables de todo requerimiento se ciñen a la indicación precisa de lo que se requiere y de cómo cumplimentarlo, cabe colegir que la omisión de la advertencia prevista en el artículo 37.4 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos no conlleva que el requerimiento de 12 de diciembre de 2024 carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, pues el acto contiene indicación suficiente de la forma y contenido de la

presentación de la documentación (documentos requeridos, lugar y plazo de presentación). De este modo, la anulación del acto impugnado por la existencia de defecto de forma en el requerimiento de 12 de diciembre de 2024 pasa por que la omisión de la advertencia en el requerimiento haya dado lugar a indefensión del licitador. Desde este punto de vista, cabe considerar que, si bien el recurrente no se condujo con el nivel de diligencia requerido en una relación de supremacía especial y provocó con su actuación la situación frente a la que recurre, la mera existencia del deber impuesto a la Administración en el artículo 37.4 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos permite inferir la existencia de una voluntad normativa de trascender el concepto usual del acto propio y su incidencia sobre el concepto jurídico de indefensión, en orden a facilitar la defensa de sus derechos e intereses por los administrados; este razonamiento permite considerar que el requerimiento, al omitir la advertencia reglamentaria, dio lugar a indefensión del recurrente.

En el informe de la Abogacía General A.J.C. 154/2025 se analizan las irregularidades del requerimiento de 12 de diciembre de 2024 con otro enfoque, atendiendo al marco normativo de su emisión. Partiendo de la base de que con carácter general la Ley de Contratos del Sector Público no establece la exigencia de presentar la documentación en un determinado registro, analiza el alcance del régimen especial de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto simplificado que se establece en el artículo 159.4.c), párrafo primero, para concluir que, tratándose de una norma desfavorable para los licitadores (en la medida en que limita sus derechos generales como ciudadanos), no puede ser objeto de interpretación extensiva, de tal modo que no es aplicable a la presentación de otra documentación ulterior a las proposiciones en el procedimiento de adjudicación del contrato. A ello se une que el pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación dispone que las justificaciones o precisiones de las ofertas anormalmente bajas pueden presentarse por registro electrónico (apartado 9.5 de la cláusula 1) y que los interesados en procedimientos abiertos pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente, accediendo a la página “Gestiones y trámites” del sitio web de la Comunidad de Madrid (cláusula 11, último párrafo), de donde cabe inferir que la justificación de la presunción de anormalidad puede presentarse en cualquier registro electrónico, siéndole aplicable el régimen administrativo general. Por todo ello, el informe entiende que el requerimiento de 12 de diciembre de 2024 incurre en infracción material del ordenamiento, no por omitir la advertencia del artículo 37.4 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, sino por realizar una interpretación extensiva del régimen especial de presentación de proposiciones y por contravenir el régimen de presentación de documentación previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación.

Estos razonamientos conducen a la conclusión de que el requerimiento de 12 de diciembre de 2024 incurrió en causa de anulabilidad al haberse cometido en su emisión infracción material o formal cualificada del ordenamiento jurídico. Dado que los efectos sobre el acto impugnado de 16 de enero de 2025, aun no siendo inmediatos, conllevaron *de facto* que se desconociese que la presentación por parte del recurrente de la documentación en el Registro de la Administración General del Estado era correcta en la medida en que había sido presentada en un registro público y no se había indicado en el requerimiento que únicamente se podría presentar la documentación a través de una vía determinada ni se había avisado de las consecuencias de la presentación de un registro diferente, la infracción cometida en la emisión del requerimiento conlleva la anulación del

acto impugnado y, con ella, la estimación del recurso.

5. Contenido de la estimación del recurso

El artículo 119 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prescribe que en los casos de estimación de recursos administrativos, la resolución del recurso estimará en todo o en parte las pretensiones formuladas, salvo que, existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre el fondo del asunto, en cuyo caso se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido.

Las pretensiones del recurrente, tal como han sido formuladas en el escrito de interposición del recurso, son que *"se retrotraigan las actuaciones hasta el momento de resolución de la subsanación del requerimiento de fecha 13 [sic] de diciembre de 2024, se reconozca la situación jurídica individualizada de SATEL como adjudicataria de la licitación objeto de este procedimiento, por considerar válida la presentación por medio del Registro Electrónico General en fecha 19/12/2024, sobre cumplimiento del requerimiento de justificación de la viabilidad de oferta incurso en presunción de anormalidad en el procedimiento..., y cuanto más proceda en Derecho"*.

Analizando estas pretensiones, cabe indicar, en primer lugar, que el requerimiento que menciona el recurrente es de fecha 12 de diciembre de 2024 y fue notificado al interesado al día siguiente. Por otra parte, no es posible estimar la pretensión del recurrente de que se reconozca en vía de recurso su situación jurídica individualizada *"como adjudicataria de la licitación"*, puesto que antes de adjudicar el contrato sería necesario analizar la justificación de la viabilidad de la oferta incurso en presunción de anormalidad y, en caso de justificación positiva, continuar el procedimiento de adjudicación con la valoración y clasificación de las ofertas, determinación de mejor postor, requerimiento de la documentación acreditativa para celebrar el contrato, calificación de la misma y propuesta de adjudicación al órgano de contratación, circunstancias todas ellas que hoy por hoy son inciertas.

En el informe de la Abogacía General A.J.C. 154/2025, considerando que *"la presentación de la documentación por el interesado, dentro del plazo requerido, en el Registro de la Administración General del Estado debería considerarse correcta"* (página 30), se concluye que *"debiera estimarse parcialmente el recurso, considerar válida la presentación de la documentación por medio del Registro Electrónico General en fecha 19 de diciembre de 2024 y retrotraer las actuaciones, a los efectos de proceder, por la mesa de contratación, al examen de la documentación presentada"* (conclusión segunda). En efecto, aun cuando en el informe de 13 de marzo de 2025 de la unidad administrativa encargada del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid en la consejería respecto de la documentación presentada por el recurrente se indique que *"Al no haber entrado dichos documentos en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, no están disponibles y no es posible recibir ni consultar la documentación"*, el recurrente posteriormente presentó con el escrito de interposición del recurso un informe de justificación de la viabilidad de la oferta firmado por el representante del licitador el día 19 de diciembre de 2024, por lo que cabe considerar que dicha documentación sí está disponible en el expediente. A pesar de ello, se estima que no procede pronunciarse en vía de recurso sobre la viabilidad de la oferta del recurrente, dado el contenido técnico de dicho análisis, que en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación se prevé que se efectúe por la mesa de contratación previo informe,

en su caso, de los servicios técnicos del consorcio (cláusula 1, apartado 9.5). En estas circunstancias, se estima que no procede pronunciarse directamente en vía de recurso sobre la viabilidad de la oferta incurso en presunción de anormalidad, sino tan solo ordenar, conforme a lo solicitado por el recurrente, la retroacción de actuaciones al tiempo del análisis por la mesa de contratación de la documentación aportada por el recurrente.

Procede, en consecuencia, estimar parcialmente el recurso, anular el acuerdo de la mesa de contratación de 16 de enero de 2025 por el que se excluye al recurrente de la licitación y ordenar la retroacción de las actuaciones del procedimiento de adjudicación del contrato al momento inmediatamente anterior al análisis de la documentación justificativa de la viabilidad de la oferta incurso en presunción de anormalidad, aportada por el interesado al tiempo de la interposición del recurso.

Por otra parte, dado que el operador Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U. ha constituido garantía definitiva del contrato en su condición de licitador mejor postor tras la exclusión de la oferta anormalmente baja, procede ahora, dada la retroacción de actuaciones a resultas de la estimación parcial del recurso, acordar la cancelación y devolución de dicha garantía, instrumentada mediante depósito en la Tesorería General de la Comunidad de Madrid de un seguro de caución por importe de 2.756€, con número de resguardo 202555000293H.

G) TÍTULO COMPETENCIAL

De conformidad con lo expuesto, procede la emisión de una resolución por la que (i) se resuelva en sentido estimatorio parcial, con retroacción de actuaciones, el recurso de alzada interpuesto por Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A. frente al acuerdo de la mesa de contratación del organismo de 16 de enero de 2025 de excluirlo de la licitación, y (ii) se acuerde cancelar y se ordene devolver la garantía definitiva constituida por Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U. en su condición de licitador mejor postor tras la exclusión de la oferta anormalmente baja.

La potestad de resolver los recursos administrativos de alzada corresponde al órgano superior jerárquico del que haya emitido el acto que se impugne, conforme a lo dispuesto en el artículo 121.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, precepto en el que igualmente se precisa, a tales efectos, que los órganos que, como la mesa de contratación en el presente caso, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos; considerando que el nombramiento de los miembros de las mesas de contratación compete al órgano de contratación conforme a lo dispuesto en el artículo 326.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, cabe concluir que el órgano competente para poner fin al procedimiento de resolución del recurso de alzada es el órgano de contratación del consorcio.

Por su parte, la potestad de ordenar la cancelación de garantías está atribuida en términos generales a la autoridad a cuya disposición fueron constituidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1 del Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado mediante Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre; en el ámbito específico de la contratación pública, el artículo 65.2 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas atribuye al órgano de contratación la potestad de acordar la cancelación y ordenar la devolución de las garantías definitivas en los contratos administrativos.

Ambas competencias están atribuidas en el Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico al consejo de administración, en su condición de órgano superior al que corresponden todas las funciones y competencias del organismo salvo las que correspondan al presidente o al director-gerente, conforme se dispone en el artículo 11 de los estatutos.

Conforme a lo expuesto, el Consejo de Administración, por unanimidad de los presentes y representados, adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto el día 14 de febrero de 2025 por don Pablo Bernad Conde en nombre y representación del licitador Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A. (referencia del registro electrónico general de la Comunidad de Madrid 10/124894.9/25) frente al acuerdo de la mesa de contratación del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico de 16 de enero de 2025 por el que se le excluye de la licitación convocada para la contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística para la redacción del proyecto constructivo de ejecución de la subestación eléctrica STR Tecnológico en el ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/01/2024, que, en consecuencia, se anula, ordenando la retroacción de las actuaciones del procedimiento de adjudicación del contrato al momento inmediatamente anterior al análisis por la mesa de contratación de la documentación justificativa de la viabilidad de la oferta incurso en presunción de anormalidad.

SEGUNDO: Declarar la extinción de las obligaciones contraídas por el licitador Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U. en el procedimiento de adjudicación del contrato público administrativo típico de servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística al Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico para la redacción del proyecto constructivo de ejecución de la subestación eléctrica STR Tecnológico en el ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/01/2024, y, en consecuencia, acordar la cancelación de la garantía definitiva constituida para responder de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones cuya extinción se declara, mediante depósito en la Tesorería General de la Comunidad de Madrid de un seguro de caución por importe de 2.756€, con número de resguardo 202555000293H, ordenando asimismo que los servicios administrativos del consorcio comuniquen esta orden de cancelación de la garantía al organismo depositante conforme al modelo que proceda, a efectos de su devolución efectiva conforme a Derecho.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en relación con los artículos 2 y 25 de los estatutos del consorcio, y frente al mismo cabe interponer recurso de reposición ante el consejo de administración en el plazo de un mes contado a partir de la notificación del presente acto conforme a lo dispuesto en el artículo 124 y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 122.3, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente en el plazo de dos meses de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir."

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente certificación, con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión, y con el Vº Bº del Presidente, en Madrid a fecha de firma.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Firmado digitalmente por: GARCÍA GONZÁLEZ RAFAEL
Fecha: 2026.03.05 18:10

LA SECRETARIA

Firmado digitalmente por: GARCÍA MUÑOZ MARÍA DEL CARMEN
Fecha: 2026.03.05 08:16